

Crisis nacional

Con esta rotunda expresión ha calificado el Relator Especial de las Naciones Unidas por el Derecho a una Vivienda Digna la situación de este derecho en Andalucía y España, siendo su causa principal “la especulación urbanística desenfrenada”.

Han coincidido estas declaraciones del señor Khotari con el rasgamiento de vestiduras de diversos jefes de las organizaciones empresariales andaluzas por el decreto que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta poniendo límites al crecimiento de cada municipio en los próximos años: un 40% más de suelo urbanizable y un 30% más de población respecto a la realidad actual. Varios de estos jefes -que casi siempre son burócratas más que empresarios- han llegado a profetizar (¿o a amenazar con?) el hundimiento de la economía andaluza, el ascenso espectacular del desempleo y un aumento en los precios de las viviendas si la Junta se toma en serio esta medida rectificadora de la libertad total –es decir, de la ley de la selva- en materia de urbanismo.

Todos sabemos que en el sector se instauró desde hace décadas el capitalismo más salvaje para que unos pocos se llenen los bolsillos a costa del endeudamiento de por vida de millones de personas; de la imposibilidad de gran parte de la población (al menos un cuarto del total, según el Relator de la ONU) de acceder a una vivienda; y de la destrucción del patrimonio natural, paisajístico y cultural de nuestras ciudades, pueblos y comarcas. Lo que ha provocado un malestar social de tal calibre que está obligando a la Administración a poner reglas a quienes hacen equivaler, con una obscenidad sin límites, lo que llaman creación de riqueza y empleo con la multiplicación de sus propias cuentas corrientes a base de cuadruplicar en el mercado el costo de las viviendas, tras haberse aprovechado, casi siempre, de oscuras recalificaciones de suelos.

Especulación y corrupción están estrechamente relacionadas: ¿qué no ganarán los corruptores-especuladores, autodefinidos como empresarios, que están dispuestos a pagar muy jugosas cantidades a chorizos de la política para que estos *legalicen* sus negocios especulativos! Señalar esto no significa exculpar a los políticos corruptos sino exigir que, a la vez que estos pagan por sus desmanes, la justicia caiga también sobre quienes son su contraparte necesaria. Por decirlo más claramente: es hora de que, al igual que van saliendo los nombres de alcaldes y concejales corruptos, aparezcan públicamente los nombres y conexiones de esos tiburones de la especulación que son el eje de toda esta inmundicia traducida en cientos de millones de euros.

Significativamente, es ahora cuando el presidente de la CEA ha señalado que “es la Administración la que toma decisiones que crean especulación”. Una acusación basada en una realidad cierta pero que apenas oculta la intención de dejar en la impunidad, o al menos en segundo plano, a los máximos beneficiarios de la especulación. Es hoy cierto que los empresarios del sector de la construcción están bajo sospecha. Y puede ser verdad que algunos, o muchos, de ellos puedan estar “trabajando honestamente”, como afirma Herrero. Pero decir esto es aclarar poco. Habría que analizar, primero, desde qué parámetros éticos se define la *honestidad*, sin confundirla con legalidad. ¿Es honesto, por ejemplo, ganar el cuatrocientos por cien en cada vivienda? ¿Es honesto subcontratar, o permitir una cadena de subcontrataciones, a sabiendas de lo que ello significa para el deterioro de la calidad del empleo y de las propias obras? ¿Es honesto cooperar activamente a la “crisis nacional” en el acceso a la vivienda que denunciaba el

enviado de Naciones Unidas? Y, segundo, ¿será gracias a su *trabajo honesto* que sean promotores inmobiliarios y dueños de constructoras quienes compren grandes empresas eléctricas o clubs de fútbol, habiendo empezado, muchos de ellos, su actividad “empresarial” trabajando de poceros, albañiles o pasantes de abogado?

Quienes, teniendo responsabilidades políticas, han alimentado o permitido la libre acción de estos tiburones del cemento y el ladrillo son, sin duda, evidentes cómplices de una situación insostenible de mafias, corrupciones, destrucción del territorio y negación del derecho fundamental a la vivienda. Pero no son los únicos responsables: el núcleo del problema no es sólo de moralidad de quienes ostentan cargos políticos sino del modelo económico y social que define tan inadecuadamente qué sea el “desarrollo” y el “progreso” y que pone como ejemplo a seguir a quienes logran enriquecerse por ese método.

ISIDORO MORENO
Catedrático de Antropología
Universidad de Sevilla